

argentina: un año violento

julio morandi

NOTAS

Para Argentina, el año 1969 fue uno de los más significativos de este siglo en materia política, un año de marcado ascenso de la lucha de masas y de agudo enfrentamiento popular al sistema. Si bien al finalizar el año el régimen militar parecía afirmado, los hechos ocurridos en Córdoba y Rosario, especialmente, y en otras ciudades del país, a lo largo de todo el año, seguían gravitando en el panorama político y se insinuaban como un presagio para el futuro inmediato.

Al comenzar 1969, el Gobierno militar no ocultaba su optimismo sobre el proceso que vivía el país, acababa de atravesar un año relativamente tranquilo —1968— y nada hacía presumir a las clases dirigentes que esa tranquilidad a medias pudiera ser alterada. En el esquema del régimen, el plan de estabilización impuesto en marzo de 1967 por el ex ministro Krieger Vasena se estaba cumpliendo y los trabajadores parecían acatar, resignados, la congelación de salarios y la creciente caída de su nivel de vida. La oposición al régimen, que existía aunque calladamente, no acertaba a concretarse en acciones y sólo la desarticulada CGT opositora y el grupo sacerdotes del Tercer Mundo creaban hechos de conmoción aislada en el panorama político.

Hasta mediados de mayo, este proceso no sufrió mayores alteraciones. En abril, como un alarde de su solidez, el Gobierno Militar anunció

que a partir de 1970 entraría en funcionamiento el nuevo peso, índice de que la estabilidad económica estaba asegurada, en apariencias.

A mediados de mayo se produjo un hecho en la tradicionalmente tranquila provincia de Corrientes, que actuaría como detonante de un resaca de violencia y acciones populares como pocas veces ocurrió en el país: la muerte del estudiante Cabral, asesinado por la policía cuando manifestaba para protestar por el aumento de los precios en el comedor estudiantil. Algunas semanas después varios funcionarios del Gobierno decían, asombrados, que un hecho tan «fútil» no pudo haber desencadenado «el caos», por lo cual quedaba demostrado que todo obedecía a un plan «extremista».

Más allá de la mala fe con que estos funcionarios —incluido el propio general Onganía— analizaron el proceso, no cabe dudas que los hechos los sorprendieron, al igual que a todos los analistas políticos, incluidos los más optimistas adictos de la izquierda. Nadie, en realidad, había advertido el volcán que bullía debajo de esa calma aparente, ni tampoco hasta qué punto las masas reclamaban acciones concretas de lucha.

La muerte de Cabral originó una protesta masiva de estudiantes en casi todo el país, especialmente en las ciudades universitarias: Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Rosario, Santa Fé, Resistencia. En Córdoba y

Rosario se produjeron nuevos muertos y allí comenzó a advertirse que se había puesto en marcha un proceso imparable; diez días después, estallaba lo que popularmente se bautizó como el «Cordobazo».

El «cordobazo», como hecho político, provocó la mayor sacudida desde la caída del peronismo, en 1955, obligó al Gobierno militar a un giro táctico de 180 grados y puso a la provincia de Córdoba en el epicentro de las luchas populares contra el régimen. Fueron dos días de luchas callejeras, con intentos rudimentarios e improvisados de guerrilla urbana y un saldo oficial de 16 muertos (otras fuentes los calculan en 30), centenares de heridos, miles de detenidos y pérdidas materiales incalculables. El ejército —que con Onganía soñó alguna vez sellar la unidad entre las fuerzas armadas y el pueblo— debió intervenir para suplir a una policía desbordada, tirotearse con los trabajadores e implantar luego los tribunales militares.

A la distancia, las acciones de Córdoba, tanto las jornadas de fines de mayo como las tres huelgas posteriores declaradas en esa provincia, sumadas a los hechos ocurridos en Rosario un mes y medio después y a otros menores producidos en algunas provincias, permiten otorgarle a 1969 la paternidad de un proceso cuyas rutas políticas son: 1) Contrariamente a lo que ocurrió tradi-

NOTAS ● NOTAS ● NOTAS ● NO

cionalmente, las luchas populares se han radicalizado en el interior del país, especialmente en Córdoba y también en Rosario. Buenos Aires ha dejado de ser, por primera vez, el centro potencialmente revolucionario del país; 2) La apertura hacia la consolidación de un frente opositor por encima de los grupos tradicionales y de la burocracia gremial.

El primer punto aparece como clara consecuencia de los hechos ocurridos este año; el segundo como una perspectiva para el próximo, asentada sobre la base de las conclusiones políticas que dejó 1969.

El «Cordobazo» trajo consecuencias inmediatas; la mayor fue la caída de todo el gabinete de Onganía, medida que el Presidente debió tomar antes (por lo menos con varios de sus ministros), pero que resistió hasta el final. Simultáneamente abrió el diálogo con los burócratas gremiales, espantados también por los hechos de Córdoba, que se les habían ido de las manos, y les hizo las primeras promesas. Pieza fundamental de ese diálogo era el líder de los trabajadores metalúrgicos y máximo dirigente de la burocracia gremial peronista, Augusto Vandor. El treinta de junio, un día antes de iniciarse la huelga general de 48 horas impulsada por la CGT opositora (fortalecida después del «Cordobazo»), Vandor cayó asesinado en su despacho, acribillado a balazos por cinco desconocidos. En ese momento, el proceso político afrontó un momento

crítico, pero los burócratas gremiales prefirieron mantener la calma y el régimen asimiló el golpe. La muerte de Vandor quedó envuelta en el mayor misterio. Con los meses se fortalece la impresión de que sus autores fueron agentes de algún servicio de seguridad: sólo así puede explicarse que la policía no haya practicado ninguna diligencia, ninguna detención, con referencia al hecho. La muerte de Vandor, se vería después, restaría una pieza negociadora fundamental a la burocracia gremialista actualmente en un proceso de descomposición que el líder metalúrgico habría controlado.

El asesinato de Vandor determinó al Gobierno militar a implantar el Estado de Sitio, una medida de relativa significación ya que no modificó en mucho las características de la represión. Detrás, el Gobierno practicó una «razzia» entre militantes opositores, especialmente vinculados a la CGT opositora, entre ellos su principal dirigente, Raimundo Ongaro.

A fines de ese mes, otro hecho conmocionó el panorama político argentino: la visita de Nelson Rockefeller. El enviado de Nixon fue recibido en Buenos Aires con el incendio simultáneo de catorce supermercados «Minimax», pertenecientes a la familia Rockefeller. El hecho demostró una sorprendente eficacia de

NOTAS ● NOTAS ● NOTAS ● NO

los grupos de izquierda de acción directa que actúan en la Argentina. La visita de Rockefeller fue seguida de numerosas acciones callejeras y de una huelga parcial dispuesta por los sectores más combativos.

En una de esas acciones murió acribillado a balazos por la policía Emilio Jaúregui, uno de los militantes más combativos de la izquierda revolucionaria.

Un mes y medio después, la violencia se trasladó a Rosario —segunda ciudad de la República, junto con Córdoba— a raíz de una huelga ferroviaria. Durante un día y medio trabajadores y estudiantes enfrentaron a la policía; el ejército intervino parcialmente. Las consecuencias fueron menores que las de Córdoba, pero su influencia sobre el proceso fue similar, o aún mayor.

Onganía pasó por los peores momentos desde junio de 1966 y poco faltó para que su derrocamiento fuera inevitable. Algunas publicaciones recogieron en ese momento una frase del Comandante en Jefe del ejército, general Alejandro Lanusse, referida a la imposibilidad del ejército de producir un golpe de estado: «No tenemos libreto», es decir, no sabemos qué hacer después de derrocar a Onganía.

Hasta fines de septiembre, la suerte de Onganía fue incierta y el país parecía precipitarse hacia un enfrentamiento total. Los grupos gremiales combativos presionaban para la rea-

lización de una huelga general y se fijó la fecha, primero y dos de octubre, con la adhesión de todos los sectores sindicales. No era una huelga más. Estaba prevista, como la de Córdoba, comenzarla a media mañana, con abandono de los lugares de trabajo y marchas callejeras. Inicialmente, el Gobierno amenazó con la represión, pero pronto, se dio cuenta que no podría resistir un enfrentamiento de tal naturaleza. Optó, entonces, por la negociación, a la que se aferraron como náufragos los dirigentes sindicales «dialoguistas» de Buenos Aires, espantados también por la marcha de un proceso que no deseaban ni ya controlaban. Dos días antes, una docena de burócratas sindicales se entrevistaron con Onganía y suspendieron la huelga. Con la mayoría de sus dirigentes presos, el sindicalismo combativo no pudo asumir la dirección del movimiento, que se debilitó. Sólo en Córdoba la huelga tuvo gran repercusión.

A partir de allí, la tensión comenzó a aflojarse y el Gobierno de Onganía entró en un remanso. Pactó un acuerdo con los burócratas gremiales, que aún se debate entre la vida y la muerte. Dicho acuerdo otorgó a los burócratas: la entrega del local de la CGT, aumentos generales de salarios, la libertad de los presos políticos y la promesa —aún no satisfecha— de poner en sus manos un fondo social de unos 115,000,000 de

NOTAS ● NOTAS ● NOTAS ● NO

dólares, obtenidos por el aporte de obreros y patronos.

El acuerdo dio a Onganía un respiro pero trajo a los burócratas serios problemas. Los dirigentes conciliadores están al borde de la división, entre quienes quieren afirmar el diálogo con el presidente Onganía y los que desean enfrentarlo para negociar desde una posición de fuerza.

De todas maneras, las luchas gremiales no decayeron, pero comenzaron a actuar aisladas. Una huelga ferroviaria, dirigida desde la clandestinidad, enfrentó durante casi un mes todas las amenazas del régimen. En diciembre, otra huelga de los obreros que están construyendo la represa hidroeléctrica de «El Chocón» tuvo repercusión nacional y puso de manifiesto la escasa influencia de los dirigentes conciliadores. Otras huelgas aisladas, marítimas, maestros, pilotos, etc. Además de las producidas en sectores o empresas, mantuvieron despiertos el descontento social.

Al trazar el panorama del año 1969, de sus hechos políticos principales, se advierte que el proceso estuvo centrado en dos polos: Los trabajadores y estudiantes por un lado, el Gobierno y el ejército por otro. Es otra conclusión que deja el año que termina: la muerte civil de los partidos políticos, incapaces, aún en escasa medida, de capitalizar la ola de agitación. No es, en realidad, un hecho que asombre. Cuando en 1966

Onganía disolvió a los partidos políticos no hizo otra cosa que sellar un hecho que existía; desde hace años que en la Argentina los partidos no sirven para otra cosa que para recolectar votos cuando hay elecciones.

Los grupos empresarios por su parte, mantuvieron una actitud en general de apoyo crítico al Gobierno militar, tratando de sacar la mayor tajada pero uniéndose detrás de Onganía cuando la agitación popular hizo tambalear todo el sistema.

La Iglesia siguió su línea independiente tratando de diferenciarse del Gobierno que hace continuada profesión de fe católica. Esto quedó claro cuando después de los hechos de Rosario, el Ministro del Interior, general Imaz, reclamó de la jerarquía católica el apoyo al Gobierno. En un documento secreto —pero que tomó estado público— la jerarquía contestó que no, y recriminó al Gobierno por hacer públicos semejantes pedidos. Otro hecho: la consagración del país a la Virgen María, una idea de Onganía que la Iglesia apoyó sólo protocolarmente.

Pero mientras la jerarquía mantenía el protocolo, varios obispos del interior del país, enfrentados a los gobiernos provinciales, asumieron una posición cada vez más crítica frente al régimen. Además, durante el año pasado, se acentuó la acción de los Sacerdotes del Tercer Mundo,

NOTAS ● NOTAS ● NOTAS ● NO

un movimiento que ha ido creciendo en todo el país. El episodio más importante lo produjeron en Rosario, cuando 30 sacerdotes se enfrentaron con el arzobispo Bolatti y terminaron presentando su renuncia.

Los estudiantes, por su parte, unificaron en gran medida su actividad contra el régimen junto a los trabajadores en las acciones callejeras donde tuvieron preponderante participación después de haber actuado como detonante.

Frente a este sector, que desde un comienzo fue el enemigo mayor del régimen, el Gobierno intentó también la conciliación, a través de la acción de su nuevo Ministro de Educación, doctor Pérez Guilhou, uno de los más hábiles que tuvo Onganía a su lado. Si bien no logró hacer «participar» a los estudiantes como lo anunció —cosa difícil sino imposible— hizo que la tensión aflojara. La fianzación de las clases lo ayudó por cierto. Sin embargo, sobre fin de año fue recibido a pedradas y tomatazos en la Universidad de Rosario. Pero no cabe duda que su acción «pacificadora» en algunos sectores fue mucho más útil que la violencia desatada por su antecesor.

LAS FUERZAS ARMADAS: EL ÚLTIMO PLAZO

Finalmente, cabe analizar la actitud de las Fuerzas Armadas, especialmente del ejército, que actuó ambiguamente como Gobierno o separado de él, de acuerdo con las circunstan-

cias. El año se inició con las miradas puestas en las disidencias habidas entre Onganía y el Comandante en Jefe, general Alejandro Lanusse. Tales disidencias existen y subsisten, pero es claro que no actúan mecánicamente y tienen diversos matices. En el momento de los levantamientos populares, el ejército apareció junto a Onganía y, a regañadientes, reprimió en Córdoba y Rosario. Después de los hechos de Rosario, las relaciones entre el ejército y Onganía pasaron por el punto más bajo desde junio de 1966. Fue en ese momento en que se instituyó la caída de Onganía. Es evidente que Lanusse y los jefes que lo apoyan no estaban en condiciones de dar el golpe y, en cambio, negociaron con Onganía.

Un tiempo después, en más de una oportunidad, Lanusse formuló declaraciones (las más recordadas fueron las que hizo en Estados Unidos) con claras presiones para que el Gobierno llamara a elecciones. Posteriormente, se hizo evidente que el Comandante en Jefe desaparecía del primer plano político. Los observadores estiman que el ejército le abrió al Gobierno un crédito para que aplique este plan de pacificación que está en marcha, y hay quienes señalan que es la última oportunidad que se le concede a Onganía.

El ejército, como institución, sufrió una seria crisis a mediados de año

NOTAS ● NOTAS ● NOTAS ● NO

cuando fue descubierto un plan de acción contra el Comandante en Jefe, que reunía a varios coroneles y que lo encabezaba el general Eduardo Labanca. En el momento que este grupo debía comenzar a actuar, Labanca, un militar de corte nacionalista, se echó atrás y la crisis culminó con su pase a retiro y el arresto de varios coroneles.

Sobre el fin de año, cuando parecía que Onganía entraba en la tranquilidad tradicional del verano, varios hechos confluyeron para agitar las aguas del panorama político. Por un lado, la ofensiva del ex Presidente, general Aramburu, en medio de la creciente actividad de los grupos liberales; por otro, la contraofensiva «nacionalista» con el coronel retirado Francisco Guevara, embajador en Venezuela a la cabeza y un tercer factor: lo que puede ser el

comienzo de un plan de acción de un grupo izquierdista de acción directa.

Dos acciones paramilitares en pocos días, con resultados relativos, llevaron inquietud a los organismos de seguridad. A todo esto se sumaba la detención de sesenta activistas del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), uno de los grupos izquierdistas más activos en la provincia de Tucumán.

1970 se abre con una perspectiva poco alentadora para la «siesta veraniega» oficial.

Las presiones entre «liberales» y «nacionalistas» en torno al gobierno, tienden a acentuarse y pueden romper el equilibrio que Onganía mantuvo desde 1966. Para cualquiera de los dos lados que se incline, la crisis es inevitable.